1er Proveído: 10/02/2023

Expediente Principal N°:34/23

HERRERA, Diego Fernando y Otro C/ REFSA y/u Otros S/ Juicio de Amparo (ley 749)

Formosa, 09 de febrero de 2023 .-Téngase a los recurrentes presentados, parte en el carácter invocado, por constituido el domicilio procesal indicado, y electrónico casilla de correo meligsilva@hotmail.com, por denunciado los domicilios reales, dese la intervención de ley.- Téngase presente la adhesión formulada a sus efectos.-

A la habilitación de días y horas: atento a que el instituto previsto por el art. 153 del CPCC es de carácter excepcional estando obligado quien la requiere, no solamente a invocar los potenciales perjuicios que la resolución dictada en los términos del art. 152 del CPCC le acarrearía, sino además debe acreditar los motivos de urgencia, debiendo Juzgarse rigurosamente tal circunstancia, en tanto si el Juzgado no exigiera la acreditación suficiente de dicho supuesto, el gran cúmulo de causas y escritos que ingresan diariamente basadas en el instituto antes referenciado, iría en desmedro de aquellos procesos en los que los justiciables esperan sean resueltos en el marco del artículo mencionado en segundo término; por ello y no hallándose acreditado suficientemente la urgencia en el caso de autos, a la consideración de lo solicitado con habilitación de días y horas no ha lugar, sin perjuicio de ello proveo con preferente orden.-

Atento a que la vía amparil es de naturaleza excepcional, previamente se debe analizar la admisibilidad del planteo, para lo cual corresponde aclarar que a los fines de la procedencia del amparo es exigible presupuestos sustanciales, tales como la existencia de arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo proveniente de autoridad pública o de particulares, que exista lesión de derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, tratado o ley, y la inexistencia de otro medio judicial más idóneo. En el caso en particular donde los pretensos amparistas solicitan la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la Resoluciones que modificaren el sistema tarifario por considerarlo ilegal y abusivo, mencionando entre los hechos que la empresa REFSA no ha aplicado para la categoría RESIDENCIAL N°3, la segmentación tarifaria, tal como lo prescribe el Decreto Nacional N° 332/22, y que no ha se ha dado difusión a los cuadros tarifarios. De las documentales acompañadas a autos no es posible vislumbrar acto de arbitrariedad o ilegalidad por parte de REFSA, dado que no arrimaron los presentantes la Resolución cuya declaración de inconstitucionalidad y nulidad pretenden.

Tampoco surge la ilegitimidad del monto facturado dado que las facturas acompañadas refieren solo a la última lectura realizada las que además superan en kwh a la lectura anterior, (no acompañando lecturas y/o facturas de energía anteriores y/o planilla descriptiva de los diferentes periodos), por lo que no es posible efectuar una comparación que determine la existencia de un monto abusivo, máxime teniendo en cuenta lo que es de público conocimiento, que el Poder Ejecutivo Nacional Decretó el 16/06/22 el nuevo régimen de subsidios en el marco de política económica a fin de garantizar servicio de calidad, disponiendo que para ser beneficiario de subsidios deberá acreditar determinados requisitos, frente al organismo pertinente, todo lo que de autos no se desprende (no adjunta reclamos de ninguna índole frente a REFSA y/o EROSP y/o Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa), convirtiendo al planteo efectuado en meras discrepancias, sin argumentación suficiente, que no

permite vislumbrar una de las caracterizaciones que definen a este instituto -en orden a la procedencia de la pretensión-, esto es la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión de que se trate. Así lo dispone el art. 1º de la Ley N° 749 en cuanto exige que la denunciada *ilegitimidad o arbitrariedad* del acto debe ser de un grado de claridad tal, que aparezca *manifiesta*.

Sumado a ello, y considerando la categorización que obra en las Facturas presentadas en autos -Residencial Nivel 1- que supone afrontar el costo pleno del componente de energía eléctrica, conforme Decreto Nacional 332/22, -reitero- al no obrar en autos constancia alguna de haber instado y culminado la vía administrativa correspondiente, no es posible recurrir a esta vía excepcional, ello sin perjuicio de invocar una legitimación colectiva, lo cual es improcedente por carecer de facultad para representar a la sociedad, más aún cuando Decreto 332/22, contempla la situación particular de cada uno de los individuos y si bien no es esta la Resolución atacada, (porque los presentantes no individualizan a la Resolución que desean sea pasible o no de declaración de inconstitucionalidad y nulidad) es la que refiere a las diferentes categorizaciones que hacen a la formación del monto a pagar. Además, no se puede dejar de señalar que la documental de pág. 6 se trata de una mera fotocopia, la que si bien a simple vista se podría presumir que fue emitida por la empresa demandada, no es menos cierto que la fotocopia simple no es suficiente para habilitar esta vía de excepción En consecuencia, por todo lo expuesto y lo prescripto en el art. 3 de la Ley 749, el planteo efectuado resulta inviable. A la **Medida Cautelar Genérica de No Innovar**: por idénticos motivos, por no acreditarse los requisitos exigidos por el art. 230 del C.P.C.C., y por el modo en que se resuelve, no a lugar. Por todo ello; **RESUELVO**: Desestimar “in limine”, la acción de amparo promovida. Con costas a los presentantes (art. 68 del CPCC). REGISTRESE, NOTIFIQUESE, oportunamente ARCHIVESE. Cumpliméntese con el sellado de Justicia bajo apercibimiento de cursar la pertinente comunicación a la D.G.R.- FDO. DRA. CLAUDIA PEREZ GREPO – JUEZA-

Fdo. Dra. PEREZ GREPO, Claudia Fabiola – JUEZ .-

M. L.